

INCIDENTE DE FALTA DE ACCIÓN DE CONSOLID S.R.L. EN CAUSA N° CPE 1019/2022, CARATULADA: “CONSOLID S.R.L. Y OTRO SOBRE INFRACCIÓN LEY 27.430”. J.N.P.E. N° 2. SECRETARÍA N° 3. EXPEDIENTE N° CPE 1019/2022/1/CA1. ORDEN N° 31.783. SALA “B”.

Buenos Aires, de octubre de 2024.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte querellante (A.F.I.P.-D.G.I.) contra la decisión del tribunal de la instancia anterior por la que se hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal, en los términos del art. 59 inciso 6° del Código Penal y, en consecuencia, se declaró extinguida la acción penal y se dictó el auto de sobreseimiento respecto de J. A. N. (el cual, por un evidente error material, fue identificado en la resolución como J. A. N.), y de CONSOLID S.R.L.

El memorial por el cual la apoderada de la parte querellante (A.F.I.P.-D.G.I.) informó en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

El escrito por el cual la defensa de J. A. N. informó en orden a la existencia de un “*Hecho Nuevo*”, y solicitó que se confirme la resolución que dispuso el sobreseimiento del nombrado, ya sea en los términos del planteo que motivó la formación del presente o por aplicación del nuevo régimen de extinción de la acción penal previsto por la ley 27.743.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, por la resolución recurrida, el tribunal de la instancia anterior hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal que dedujo la defensa de J. A. N. y de CONSOLID S.R.L., en los términos del art. 59 inciso 6° del Código Penal.

Para resolver en aquel sentido, el señor juez “*a quo*” sostuvo que resultaría aplicable el instituto de la reparación integral del daño, en los términos establecidos por el artículo 59, inciso 6° del Código Penal, por cuanto no existiría una norma legal que restrinja la aplicación del mismo para los delitos tributarios y que, según surge de la información brindada por la A.F.I.P., la deuda de CONSOLID S.R.L. en concepto de aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social se encontraría saldada.

2º) Que, por el recurso de apelación en examen, la apoderada de la parte querellante (A.F.I.P.-D.G.I.) se agravió por considerar que el instituto de reparación integral del perjuicio previsto por el artículo 59, inciso 6° del Código



Penal no resulta aplicable a los hechos aquí investigados, pues por el Régimen Penal Tributario se establece un régimen especial para la extinción de las acciones penales que desplazaría, por especialidad, al instituto referido.

Agregó que el perjuicio derivado de un delito tributario, como sería el caso de la evasión previsional, “...no se limita exclusivamente a la suma defraudada, sino que comprende el normal mantenimiento del flujo de ingresos y egresos de la hacienda pública...” por lo cual el pago tardío de la deuda, mediante planes de facilidades de pago, de los aportes y de las contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social no constituiría a criterio de esa parte una reparación integral del daño.

3º) Que, en las actuaciones principales a las cuales corresponde este legajo se atribuyó a J. A. N. y a CONSOLID S.A. la comisión presunta del delito de evasión del pago de aportes y/o contribuciones correspondientes al Sistema Único de la Seguridad Social correspondientes a los períodos mensuales 5/2020 a 3/2021, por la suma de \$4.665.430,13, en los términos previstos por el art. 5 del Régimen Penal Tributario establecido por el art 279 de la ley 27.430.

4º) Que, a los fines de resolver el recurso en trato cabe tener presente que, por el art. 59, inc. 6, del Código Penal, se establece: “...La acción penal se extinguirá [...] Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes...”.

La posibilidad extintiva de la acción penal reseñada se enmarca entre las herramientas que brindan la ley 27.147 y el Código Procesal Penal Federal para la instrumentación de las reglas de disponibilidad de la acción, que deben interpretarse y aplicarse en el marco establecido por el criterio sentado por el art. 22 del Código Procesal Penal Federal, cuya implementación se efectuó, por la resolución N° 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal.

Por esta norma se prevé que “Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía, entre sus protagonistas y a la paz social”.

5º) Que, por resoluciones diversas dictadas por ambas Salas de esta Cámara se estableció que el art. 59 inc. 6º del Código Penal puede tener aplicación con relación a “...aquellos delitos respecto de los cuales pueda haber una conciliación o una reparación integral del perjuicio ocasionado, siempre y cuando no mediaren respecto de las mismas disposiciones de leyes penales especiales que contemplen preceptos que la hagan inaplicable por contrariedad con la regla genérica (artículo 4 del Código Penal).



4º) Que, por el artículo 16 de la ley 24.769 (texto según ley 26.735; que se encontraba vigente a la fecha de comisión de los hechos investigados), se contempla un modo particular de alcanzar la extinción de la acción penal por el cumplimiento de las obligaciones evadidas, el cual puede tener lugar en las circunstancias precisadas por aquella norma, esto es de manera espontánea.

5º) Que, el cumplimiento de las obligaciones evadidas podría equipararse, sin necesidad de ingresar en comparaciones más precisas y en términos de los alcances prácticos del mismo, a la reparación integral del perjuicio ocasionado por un delito, lo que permite advertir que en la materia de la que se trata se encontraba vigente un régimen especial y diferenciador del general contemplado por el artículo 59 inc. 6 del Código Penal, razón por la cual, para que la acción se extinga debe verificarse si en el caso concurren los demás requisitos previstos por la ley penal especial con respecto a los delitos del denominado Régimen Penal Tributario...

7º) Que la incongruencia o la falta de previsión no se suponen en el legislador (Fallos 304:954, 1733 y 1820; 306:721; 307:518; 314:458, entre otros), y es de destacar que al momento de dictarse la ley 27.147, que incorporara el inc. 6 del artículo 59 del Código Penal, estableciendo una forma nueva de extinción de la acción penal, se encontraba vigente el artículo 16 de la ley 24.769, el cual no fue derogado por el legislador, por lo que corresponde concluir que, en materia de los delitos de la ley penal tributaria, aquel pretendió mantener un régimen especial diferente al contemplado por el artículo citado del Código Penal, pues en caso de haber querido que para los delitos previstos por aquella ley rigieran todas las disposiciones generales sobre la extinción de la acción penal, le hubiese bastado con suprimir la norma diferenciadora especial para dar lugar a la aplicación de aquéllas.

8º) Que, en este mismo orden de ideas, es importante resaltar que, por el Régimen Penal Tributario introducido por el artículo 279 de la ley 27.430, ley posterior a la que produjera la incorporación del inciso 6 del artículo 59 del Código Penal, el legislador mantuvo un sistema especial de extinción de la acción penal con respecto a algunos delitos previstos por aquel Régimen (art. 16 del nuevo régimen), muestra inequívoca de que, en este aspecto, en materia penal tributaria, no ha querido estar a las disposiciones generales del Código Penal..”

(confr. CPE 1826/2016/1/CA2, res. del 3/05/2019, Reg. Interno N° 282/19, CPE 1604/20172/CA3, res. del 2/11/2020, Reg. Interno N° 494/20, CPE 1276/2017/4/CA3, res. del 25/02/2022, Reg. Interno N° 67/22, CPE 575/2021/3/CA3, res. del 13/03/2023, Reg. Interno N° 78/23 y CPE 121/2021/5/CA4, res. del 25/04/2023, Reg. Interno N° 161/23, entre otros, de esta Sala “B” y CPE 1755/2016/1/CA1, res. del 18/10/2017, Reg. Interno N° 645/17 y CPE 438/2017/1/CA1, res. del 20/09/2018, Reg. Interno N° 757/18, ambas de la Sala “A” de esta Cámara).



6º) Que, en el supuesto de hecho que se investiga en los autos principales, al cual, en principio, resultarían aplicables las previsiones del Régimen Penal Tributario introducido por la ley 27.430, de conformidad con lo alegado por la parte recurrente, no es posible aplicar ni alcanzar los efectos de la norma contenida por el art. 59, inciso 6º, del Código Penal, pues el legislador ha previsto especialmente para los delitos tributarios un régimen particular de extinción de la acción penal por cumplimiento de las obligaciones evadidas -por el art. 16 de aquel régimen-, el que desplaza, por especialidad y oposición, las previsiones del Código Penal citadas, por aplicación de la previsión expresa del art. 4 de ese mismo cuerpo normativo.

Al respecto, corresponde señalar que, con relación a la regla establecida por el art. 4 del Código Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado, en el caso de Fallos 344:3156 (“Vidal”), que no es “*...preciso que las leyes dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsidiaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposiciones de aquellas (Fallos: 212:64)...*”.

7º) Que, por lo expuesto por los considerandos que anteceden, conforme con lo postulado por la parte recurrente, la decisión del señor juez que intervino en la instancia previa, **quien no debería desconocer el criterio sostenido por ambas Salas del Tribunal de alzada de este fuero**, recordado por el considerando 5º de la presente, en cuanto hizo lugar a la declaración de extinción de la acción penal por reparación integral del daño y dictó el auto de sobreseimiento de J. A. N. y de CONSOLID S.R.L., no resulta ajustada a derecho, por lo que debe ser revocada.

8º) Que, por último, es de destacar que no corresponde el tratamiento en esta instancia de la solicitud efectuada por la defensa de J. A. N. a fin de que se confirme la resolución apelada por aplicación de otro planteo subsidiario de extinción de la acción -formulado con posterioridad a la audiencia prevista por el art. 454 del C.P.P.N.-, toda vez que aquel planteo no fue considerado por la decisión que se revisa y podrá ser efectuado por ante la instancia correspondiente en el caso que se estime corresponder.

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. REVOCAR la resolución recurrida.

II. SIN COSTAS (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).



Poder Judicial de la Nación

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase.

Firman sólo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía restante de esta Sala.

